

Rolando Ames

# Un año de nuevo gobierno... ¿y de democracia?



El aporte del nuevo gobierno, que se ufana de su carácter democrático, a la real democratización del país, no parece tan decisivo como el de las luchas populares. El momento es propicio para precisarlo y para discutir las perspectivas de la política peruana.

**L**a evaluación del año transcurrido bajo el nuevo Gobierno es un tema naturalmente frecuente en este tiempo. Máxime si se trata no sólo de un nuevo gobierno sino de un nuevo régimen, es decir de una nueva forma de gobernar: de la re-instalación de la institucionalidad política demo-liberal, después de un receso de doce años. Por una tradición histórica que ha marcado nuestro lenguaje, aunque es cada vez más felizmente criticada, esta forma de organi-

zación del gobierno se denomina aún muchas veces como "la democracia". Ello da materia y razón adicional a evaluaciones, como la que aquí ensayamos.

Para importantes y activos núcleos populares, para significativos sectores intelectuales, la inauguración del régimen de Belaúnde no fue una esperanza de algo muy distinto al régimen que terminaba. Pero para grandes masas de la población y para muchas gentes informadas era sí, sino esperanza, expectativa positi-

va. Este año ha servido entre otras cosas para, lamentablemente, reducir el margen de esas expectativas y ojalá sirva también para que cada vez más peruanos vayamos viendo claro de qué depende, cómo se avanza, en el camino de esa sociedad distinta, humana, justa y libre que deseáramos ver instaurada en nuestro suelo.

Los dos temas más importantes en el comentario de la política de este año nos parecen el de la política económica

y el de la democracia. Nos referiremos a ellos en cuanto cuestiones al mismo tiempo globales, de fondo y entrelazadas. Nuestro tercer punto trata de algunos aspectos de la lucha política durante este año y su significación social. Terminamos reflexionando brevemente sobre el último conflicto entre Iglesia y Gobierno.

### Gravedad de la política económica impuesta.

Bajo el Gobierno de Morales Bermúdez acabábamos de pasar por esos duros años de crisis económica, previsible ya desde antes, en la que los sueldos y salarios cayeron prácticamente a la mitad de su valor. Habíamos sufrido represión y "estado de emergencia". Es decir, habíamos soportado empobrecimiento económico y dictadura política simultáneamente. Lo que este año hemos vivido y observado nos confirma en otra constatación: las formas democráticas liberales constituyen una alternativa positiva frente a las dictaduras militares, pero no comportan de por sí democracia económica, no son signo suficiente de si la sociedad se democratiza o no.

La política económica del nuevo Gobierno, ya no sólo explicable por la crisis, sino orientada explícitamente a establecer para las próximas décadas nuestra forma de crecimiento económico y de organización social, se revela como generadora de más desigualdad, y también como insensible a las exigencias elementales del pueblo pobre de este país. El Perú, como los otros países de América Latina, comprueba hoy esta contradicción objetiva y al parecer inmanejable entre el funcionamiento del sistema capitalista internacional dentro del que vivimos y la atención a las necesidades materiales y de organización y expresión libre de las clases populares.

Ni la imagen paternal del Presidente, bastante deslucida últimamente, ni la propaganda de una prensa parametrada de otra manera pero igualmente monocrorde, ni intentos de "concertación social" algo más reales, como el de la Tripartita, tienen objetivamente la misma importancia y los mismos efectos sociales que la liberación de los controles de precios, que la reducción de los aranceles, que la apertura al gran capital extranjero para que nuestro país crezca y defina su destino como exportador de materias primas. Son estas orientaciones básicas de la política económica, lo principal que el nuevo Gobierno ha decidido y ha empezado con gran celeridad a ejecutar. Por ello tiene en primer lugar que ser juzgado.

La racionalidad de esta estrategia es clara e internamente coherente, aunque en el Perú se aplique aún con flexibili-



*El gobierno apuesta al capitalismo transnacional*

dad. Pero su punto objetivo de partida es ordenar el funcionamiento de nuestra economía desde el punto de vista del mercado y por tanto principalmente del mercado internacional, y no desde la búsqueda prioritaria de atender las necesidades de los trabajadores y sus familias. Ni siquiera desde el punto de vista de un mayor margen de autonomía nacional. Es la racionalidad de dejar que los agentes económicos "solventes" adapten su oferta y su demanda, con el sacrificio necesario de las mayorías, económicamente poco importantes. La racionalidad de la economía y de la ganancia se impone sobre la de la solidaridad social y la dignidad humana.

La apuesta es que finalmente la economía capitalista terminará sirviendo a las necesidades sociales. Brasil que ya lleva más de 15 años haciendo el experimento, Chile 8, Argentina en la última etapa 5, pese a que sus poblaciones en promedio distaban de vivir en los niveles de escasez que la nuestra, nos señalan claramente que esa adecuación entre capitalismo transnacional y necesidades de las masas pobres no se produce ni en el mediano plazo. Es cierto que la magnitud del problema es tal, que las alternativas programáticas factibles son difíci-

**“Las formas democráticas liberales constituyen una alternativa positiva frente a las dictaduras militares, pero no comportan de por sí democracia económica”**

les y no están hoy diseñadas con la precisión suficiente. Pero la dificultad de encontrar el tratamiento de recuperación o el remedio, no autoriza a seguir dando veneno al paciente. Incluso el mero reconocimiento que los costos de la estrategia económica son y pueden seguir siendo tan altos, debería obligar a respetar de veras a la oposición popular y a no confundirla deliberadamente con el magnificado "terrorismo". Sobre la base de estos reparos e interrogantes cruciales, desarrollados desde una perspectiva de análisis económico en el número anterior, (1) debemos evaluar los aspectos más políticos de funcionamiento del nuevo Gobierno y el nuevo régimen.

### Logros democráticos. Cuáles y de quiénes.

El Presidente de la República declaró el 28 de Julio, que el principal logro de su primer año de Gobierno era la restitución de los diarios a sus antiguos propietarios. Por confesión de parte este es el mejor índice de cuán distorsionada concepción de la democracia puede tener la mentalidad de nuestra clase dominante y sus representantes políticos. En un país con los problemas sociales del nuestro, no les resulta contradictorio ufanarse como logro principal de devolver cinco empresas periodísticas a sus millonarios dueños, indemnizarlos bien y considerar servida así la libertad de prensa, aunque todos esos diarios coincidan en un amplio frente de respaldo al Gobierno y casi sacralicen de nuevo los principios de la economía capitalista.

La otra afirmación central sobre conquistas democráticas en la auto-evaluación del Gobierno, está encerrada en las

(1) (Ver Javier Iguiniz, "Balance económico de un año", en Páginas n. 39, agosto 1981)

retóricas frases del mensaje presidencial: "La Constitución impera, la ley rige y la libertad reina en la República". Es útil analizarlas. La Constitución no es obra del actual Gobierno. El proceso que da lugar a la Constituyente resultó de un conjunto de presiones contradictorias, en las que en cierto sentido intervino toda la sociedad. Los grandes empresarios actuaron de un lado, el movimiento popular y la gran mayoría del pueblo de otro y, con habilidad táctica, los militares, aislados y rechazados, abrieron la transferencia via Constituyente. Este año esa ley ha regido porque toda la actual situación política es heredera de ese equilibrio de fuerzas alcanzado. Movimiento popular, militares y grandes empresarios tuvieron que aceptar de hecho coexistir políticamente en los términos del régimen demo-liberal de la Constitución y de los resultados electorales siguientes. Ninguno tuvo fuerza para reducir más la presencia de uno de los otros.

La democracia se jugó pues en la sociedad. Y el avance en democracia social real dentro de esa pugna fue forjado por los sectores populares combativos que en toda la década se fueron abriendo un espacio y adquiriendo una fuerza que no habían tenido nunca antes. Las reformas del primer gobierno militar y la propia dureza de la crisis económica provocaron por supuesto esa reacción de maneras diferentes. Lo más democrático que tiene la actual organización política viene pues de asentarse y permitir la expresión de fuerzas significativas de la sociedad, viene sobre todo de esa mayor presencia popular. Es lamentable que estos sectores populares activos vean muy disminuido su peso en el Parlamento por las trampas legales que les tendieron y por los errores de la división de la izquierda en las elecciones presidenciales. En todo caso el imperio de la Constitución o el régimen demo-liberal, no es pues un resultado de la obra de este Gobierno, es más bien previo a él.

La acción del Gobierno para garantizar el imperio de la ley, ha dejado en cambio lugar para críticas muy serias. El control de ambas Cámaras por la alianza de partidos gobernantes, ha producido un "Parlamento genuflexo", según expresión del propio Javier Alva Orlandini; la facultad de dar decretos legislativos ha sido utilizada sin moderación alguna por el Ejecutivo. Para no tocar aspectos más sustantivos y permanentes, por los cuales la aplicación de la ley, en este país, sigue dependiendo en mucho de los medios económicos y de las conexiones sociales de cada quien. Y la designación de los jueces sigue sin escapar, como eso sí lo hemos visto específicamente este año en la confirmación de los miembros de la Corte Suprema por



*El avance en democracia social real fue forjado por los sectores populares combativos*

el Parlamento, a los sentimientos políticos de simpatía o de venganza, por encima de la hoja de servicios y de la idoneidad profesional.

El imperio de la ley, para que sea real, exige que el contenido legal mismo sea justo, tome en cuenta los intereses de todas las partes, de toda la sociedad. Que no signifique, como es habitual, una trampa para los débiles. A este respecto tiene que denunciarse una vez más la gravedad de los extralimitados alcances que se ha dado al decreto-ley sobre el terrorismo. No puede caerse en el silencio para evitar sospechas. No se trata de defender al terrorismo. Pero no puede admitirse que con ese pretexto se dé un decreto, jurídicamente innecesario para el fin declarado en sí mismo, y que lo que permite de nuevo es precisamente ser un arma de amedrentamiento y de abuso contra cualquier protesta de los trabajadores y de los más pobres. Se están produciendo ya suficientes hechos que confirman esta intención y este uso injusto de un instrumento "legal".

Finalmente "el grado de libertad que reina en la República" tampoco ha sido alcanzado por acción de este Gobierno, ni éste la defiende coherentemente o la profundiza en su dimensión principal de aumento de la libertad, de la capacidad de iniciativa solidaria de las mayorías populares. Más bien la política económica convierte al Gobierno, quicralo o no, en el principal enemigo potencial de esa libertad.

Defender lo conquistado en este terreno no equivale pues a la defensa del

Gobierno, ni incluso a la de esta democracia liberal por sí misma o como valor supremo. Señalábamos que estas instituciones políticas se han organizado sobre la base de una correlación de fuerzas sociales contradictorias. Entonces la defensa y la conquista de niveles superiores de libertad material y espiritual para el pueblo depende de la propia capacidad de éste para organizarse bien, para mejorar su fuerza gremial y política e imponer por lo menos algunas de sus reivindicaciones en el corto plazo.

La contradicción sustantiva no es entre el Gobierno y "los enemigos de la democracia", que en términos de fuerza real no podrían ser por supuesto, "los terroristas", sino los potenciales militares golpistas. La contradicción principal de la que depende la real suerte no sólo del Gobierno, del régimen demo-liberal, sino sobre todo de la libertad concreta que en cierto grado el pueblo ha conquistado, es la que opone como comentamos al comienzo, la política económica del gran capital a la satisfacción de las necesidades de las mayorías. Es esta contradicción, lo repetimos, la que trajo abajo regímenes demo-liberales en otros países de América Latina. Y la que ha llevado al poder a los peores regímenes militares. Y ella no tuvo como enemigo ni víctima principal a los políticos civiles que se van al exilio, sino a las organizaciones populares que son las que expresan el rechazo masivo y las que sufren por tanto la más dura y total represión, incluido el asesinato sistemático.



*Se sigue postergando la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías*

No queremos negar el hecho real que en lo inmediato el actual Gobierno ha mantenido, mas allá de agresiones parciales, respeto a la existencia de las organizaciones populares como conjunto. Pero por otro lado también ha tomado o anunciado la preparación de medidas que configuran una peligrosa amenaza para aquéllas. Aparte de la política económica y del uso del Decreto Legislativo sobre el terrorismo, hay que mantener el alerta sobre lo que se intente vía la legislación sobre los sindicatos y sobre las huelgas.

Por eso colocamos en primer lugar en materia de conquista y de defensa de la democracia, el progreso de la misma organización popular. Porque de lo contrario las contradicciones de la política del Gobierno pueden llevarlo a reprimir a esa organización dentro del marco de esta misma legalidad; a recurrir al peor contenido posible de la intervención militar: la imposición de la violencia física contra los pobres, tras la fachada de un gobierno civil, que quedaría reducido sólo a apariencia, aunque los medios de comunicación se llenasen de palabras justificatorias "en defensa de la democracia". No vemos presente el desencadenamiento inmediato de esta situación, pero sí vemos operando las tendencias que pueden llevar a ella. Y vemos que las fuerzas sociales más conservadoras y ciegas han recuperado poder real en la sociedad, dentro y fuera del Gobierno, con plena tolerancia, cuando no con explícita coincidencia con éste.

### La lucha política durante este año.

Debemos referirnos ahora a cómo y por qué la lucha política inmediata tiene tales características que ha podido ser absorbida en buena parte al interior del partido gobernante, Acción Popular.

Sobre la escena abierta por la acción de otras fuerzas sociales ya mencionadas, los partidos políticos tradicionales han reaparecido como los intermediarios entre las demandas de la sociedad y los centros de poder político estatal. El Partido Popular Cristiano expresa el intento de crear un partido conservador más permanente ligado directamente al mundo empresarial. Se debate aún, sin embargo, en las pugnas internas entre las demandas inmediatas de protección de los industriales medios y la lógica económica, que favorece al gran capital internacional, de los tecnócratas devotos de la escuela de Chicago; sufre también la tensión entre el control caudillista de Bedoya y una organización más institucional. Finalmente el problema principal irresoluble radica en que su clara identidad patronal y limeña restringe sus posibilidades de penetración democráticas en el mundo popular y en el interior del país. Es la mejor versión moderna del viejo partido civilista de notables. Su conversión en aliado gobernante ha dado ingreso directo al poder estatal a posiciones patronales extremas.

Acción Popular, con su clásico carácter de partido caudillista y electoral, nos ha mostrado otra vez la diferenciación entre el núcleo de amigos directos del Jefe absoluto del Partido —porque de él depende todo su caudal electoral— y el conjunto de cuadros que manejan el aparato partidario; es decir los que arman el aparato de clientelas a escala nacional, los líderes regionales, etc. que están todos ellos fuertemente representados en el Parlamento. En tanto los primeros, encabezados por Ulloa, son el grupo pensante en materia de política económica, los vinculados directamente al capital extranjero, los amigos más cercanos del PPC; Alva Orlandini y los segundos se ubican naturalmente en una oposición más "populista" al Primer Ministro y su grupo. Con el jefe máximo han tenido cuidado de no meterse, pese a que éste, al postergar en estos días por un año (!) el congreso partidario fijado para agosto, ha permitido que la secreta-

ría general siga en manos de los ulloístas.

Esta pugna, que en sí misma uno podría calificar de menuda, o por lo menos de puro síntoma de endebles partidaria, ha cumplido durante este año paradójicamente una función estabilizadora del Gobierno y de la figura del Presidente. Dada la división del Apra, ésta sí prácticamente total, y que la ha paralizado, y la debilidad de Izquierda Unida en el terreno estrictamente político, los diversos y contradictorios reclamos contra la política económica impuesta han encontrado muchas veces en la oposición de Alva Orlandini y su sector, el mejor vehículo o el aliado inmediato más eficaz, para conseguir logros inmediatos.

Dada su mayor cercanía social son los empresarios industriales, tanto los de Adex como los de la S.I., los que han usado más esta vía de influencia, defendiéndose de las ventajas otorgadas por Ulloa al capital extranjero y a la internacionalización mayor de nuestra economía. Belaúnde, arbitrando entre ambos grupos, vía en varios casos su intervención directa, ha flexibilizado la política de los tecnócratas y ha dado concesiones a los populistas y a sus defendidos.

Pero no son sólo los industriales los representados por el alvismo. Dado su origen y la necesidad de mantener su prestigio local, un conjunto diverso de reivindicaciones de los sectores medios y de los movimientos regionales han encontrado receptividad en este sector de Acción Popular, que acaba de ganar el control de las directivas de ambas cámaras. En la medida de sus posibilidades, al menos como receptores y apoyadores en sus procedimientos frente al Estado, los alvistas tratan también de captarse, por supuesto, la simpatía de los sectores populares, e incluso de penetrar clientelísticamente en algunos sectores sindicales.

Ya no se trata del proyecto de reformas sociales radicales que una franja de sectores medios y de pequeña burguesía desarrolló en la década de los 60 y que tuvo su expresión política en el velasquismo y en el intento de una de sus alas de concluir una alianza política con la clase obrera en cuanto tal. El alvismo tiene mucho menos horizonte político y su acción se agota sobre todo en las reivindicaciones de industriales y sectores

**“Las fuerzas sociales más conservadoras y ciegas han recuperado poder real en la sociedad, dentro y fuera del Gobierno, con plena tolerancia, cuando no con explícita coincidencia con éste”**

medios; pero esta significación social y los intentos clientelísticos hacia sectores populares no pueden pasarse por alto.

En cuanto fuerza política, la consistencia de estas posiciones en Acción Popular es precaria. Su suerte depende del terreno que Belaúnde les permita y de los recursos económicos presupuestales. La importancia que han tenido este año puede diluirse y pueden ser arrastrados por el desgaste global del Gobierno. Evidentemente ellos apuestan a la herencia el 85, pero podrían naufragar en lo mucho que aún queda para llegar allí. Es entonces la presencia social de estas reivindicaciones de sectores medios, como una fuerza más orgánica, que por tanto otros políticos le disputarán al alvismo, la que queremos destacar. Y es importante ver que la política de la gran burguesía se da maña para, aunque sea conflictivamente, arrastrar tras de sí incluso a algunos sectores sociales que, poco conscientes de las contradicciones objetivas de la economía, ofrecen su respaldo a alternativas que no pueden significar algo cualitativamente distinto para ellos.

La Comisión Tripartita, iniciativa personal del Ministro de Trabajo, Grados Bertorini, hábilmente apoyada ahora por todo el Gobierno, es otro ejemplo de un importante juego político de conciliación y cooptación, dirigido ambiciosamente al propio movimiento obrero organizado, distorsionando por supuesto su representación. Su viabilidad es difícil por la opción económica adoptada, pero sus efectos políticos son importantes; se trata de desafíos que exigen del movimiento popular un grado mayor de cohesión y desarrollo político. El diálogo tiene que ser asumido, lo importante es que la participación en él sirva al desarrollo del poder popular, y no al de sus adversarios.

#### Exigencias populares y balance global

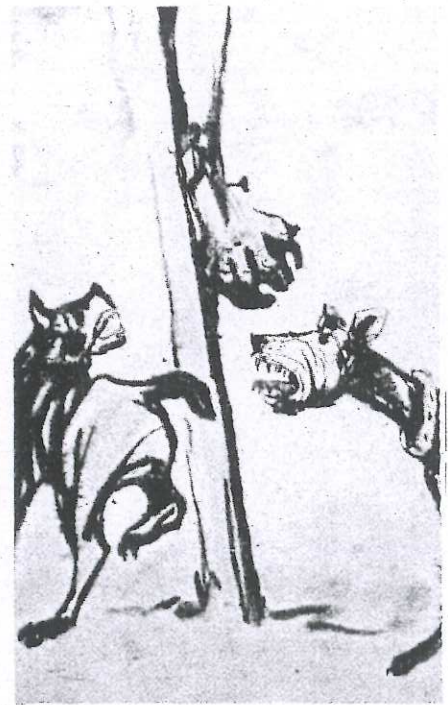
La nueva situación política empieza pues a caracterizarse por este peligroso desfase entre los procesos más importantes, más de fondo, que vive el país y la apariencia de lo que ocurre en la lucha política inmediata, en "la escena oficial". En lo sustantivo, se entrega el futuro del país al gran capital y se sacralizan las instituciones demo-liberales como si ellas constituyeran toda "la democracia", a la cual el pueblo debiera guardar respeto absoluto siempre y en toda circunstancia. En lo inmediato, la apatía, el desconcierto cuando no una cierta expectativa, dan base para que las pugnas intra AP mantengan su preponderancia en las páginas de diarios y revistas y en muchos sectores de la opinión pública. Quizás un "no saber a qué atenerse" o un "atenerse mal" subsisten en

proporción importante, mientras el desencanto no es sinónimo de lucidez ni el descontento popular más consciente termina de cuajar en fuerza política alternativa.

Con el grave handicap en contra de su reducida representación parlamentaria, con su origen fragmentario no soldado en una unidad frentista de veras operativa, con sus esquemas abstractos y dogmáticos desfasados en mucho de su práctica real, la izquierda no encuentra aún el modo de orientar y organizar a los grandes sectores descontentos, en la proporción que la fuerza alcanzada por el conjunto del "frente burgués" haría necesaria.

Los avances ocurren a un ritmo demasiado lento. Es cierto que esa quinta parte del país que ha optado por una alternativa popular y combativa es una base sólida. Pero en política la solidez de la base social propia es insuficiente cuando sobre ella no se erige una capacidad de convocación que pueda ganar la simpatía de las mayorías. Por eso el sistema dominante centra sus esfuerzos no tanto en reprimir directamente a la izquierda, cuanto en aislarla o domesticarla, pero prevenir sobre todo su expansión.

La continuación del alza del costo de vida y los reclamos de varias importantes ramas sindicales han planteado la posibilidad de un paro nacional que acaba de ser pospuesto para Setiembre. Sería ése, un importante paso para colocar otra vez la lucha política alrededor de las grandes opciones nacionales y populares y no detrás de pleitos y ambiciones mezquinas y secundarias. Sin embargo la experiencia de los últimos años nos enseña demasiado bien que los paros no son metas políticas últimas. Y para que sean lo que pueden ser, es decir hitos en el avance del poder popular, la organización sería de las diversas y heterogéneas fuerzas populares, su centralización gremial y política, su real carácter democrático y de masa, siguen siendo los de-



La Iglesia rechaza la tortura

safíos centrales.

El gris del cielo limeño, su nubosidad a veces densa pero intrascendente parece haber vuelto a contaminar la política nacional. Aprovechando esta aparente quietud, la TV y los diarios están tratando de convertir al Premier Ulloa en una especie de tribuno nacional, vibrante de preocupación popular, mientras silencian los discursos más importantes de la oposición parlamentaria. Y hasta un magnate empresario huído del país por sus malos manejos económicos y su pésima reputación social, resulta saludado y entrevistado a su vuelta, después de 10 años como heroica víctima del exilio político.

Aunque en política el pronóstico es difícil, es fácil afirmar el carácter superficial y por lo tanto inestable de la situación presente. Los problemas sustanti-

**“Hay un clima de desconfianza frente a la Iglesia que se empieza a extender en el mundo de los ricos de este país, al no encontrarla según se acostumbraron, como aliada más o menos segura. . . La Iglesia actúa y lo hace cada vez más precisamente como pueblo pobre, como comunidad creyente y solidaria. La Iglesia está colocando su hogar en el mundo del pobre, convocando a todos sin exclusión, pero desde allí. Por eso la Iglesia comienza a resultar extraña y molesta a la clase dominante”**



*El Evangelio no puede justificar la desigualdad y la opresión social, dice la Iglesia*

vos de nuestra sociedad son demasiado duros y la conciencia popular está demasiado despierta, como para que ambos no emerjan y corrijan este desfase entre realidad social y apariencia política. Lo que sí no es posible predecir pero sí preparar, es que el resurgir popular no tenga sólo el carácter cíclico y también temporal de los movimientos de protesta espontáneos, sino la consistencia de nuevas formas de organización y de práctica solidaria, sintetizando contenido popular y proyección política.

#### **El conflicto Iglesia-Gobierno**

Dentro de esta situación se produjo en el mes de Julio un directo y agudo enfrentamiento entre la Iglesia a través de sus más altas autoridades jerárquicas y el Gobierno, a raíz del Comunicado de la Comisión Episcopal de Acción Social, denunciando torturas a presos políticos acusados de terrorismo. Si bien sorprendió al grueso de la opinión pública, este hecho fue rápidamente comprendido por el pueblo creyente más organizado eclesialmente. Queremos destacar sólo algunos aspectos de este suceso, por la significación que tienen en el contexto de la situación nacional.

En primer lugar es muy importante destacar que la CEAS primero y el Cardenal luego en su respaldo, no vacilaron en comprometerse en defensa de un elemental principio de dignidad humana, pese a que estaba en cuestión una acusación que, dentro de la ofensiva ideológica de la clase dominante y del Gobierno, convierte al sospechoso detenido no sólo

en un culpable "a priori", sino en una especie de maldito del orden legal.

De allí la doble trascendencia del caso. Significaba el rechazo a la tortura como medio de tratamiento a los presos y a la satanización del acusado de terrorismo, que además de ser una persona a la que debe tratarse como tal puede ser incluso un inocente mientras un proceso judicial imparcial no pruebe lo contrario. La acción de la Iglesia contribuyó así a romper este intento de amedrentar a la opinión pública "para que no defienda a terroristas", que es precisamente uno de los objetivos del decreto legislativo expedido sobre esta materia. Las organizaciones populares que saben casi por instinto que son ellas las principales amenazadas por el citado decreto, valoraron por eso de inmediato la denuncia de la CEAS y la respaldaron con firmeza.

En segundo lugar debe situarse el aspecto de azar que jugó en este caso, para precisamente entender lo que tuvo de deliberado y consciente. El parentesco de uno de los torturados con Monseñor Augusto Beuzeville, Obispo Auxiliar de Lima, fue sin duda una ocasión fortuita que permitió a la CEAS, que tiene una permanente labor de atención en cárceles y de defensa de los derechos humanos, conocer al detalle todos los entretelones del hecho. Este fue el azar. Pero su correcta utilización para señalar que todo lo ocurrido con ese detenido, es lo que ocurre generalmente en el silencio y la impunidad con muchos otros, y para decir esto públicamente, significó una

opción clara, en un tema, como hemos visto, cargado de valor estratégico ideológica y políticamente.

La rabia de la clase dominante y sus voceros no hubiera existido seguramente si la Iglesia hubiese obtenido no sólo el trato justo al detenido, que es todo lo que exigió, sino si hubiera conseguido incluso mucho más, pero a través de la gestión amistosa ante el poder, gestión callada, exclusivamente individualista, a la que están tan acostumbrados esos círculos sociales.

Finalmente cabe recordar la increíble violencia verbal de la mayor parte de la prensa de derecha y los lamentables y hepáticos despropósitos del propio Presidente de la República. Y preguntarse: ¿se puede llegar a tanto a nivel de relaciones institucionales de esa trascendencia, por un solo caso? ¿puede incluso explicarse todo por una especie de despecho belandista ante la supuesta simpatía del Cardenal y otros Obispos por las reformas sociales del Gobierno de Velasco, como lo insinuó por ejemplo la revista "Caretas"?... Creemos que hay objetivamente bastante más que eso.

Hay un clima de desconfianza frente a la Iglesia que se empieza a extender en el mundo de los ricos de este país, al no encontrarla según se acostumbraron, como aliada más o menos segura. La Iglesia les dice con insistencia creciente que el Evangelio no puede justificar la desigualdad y la opresión social de las cuales ellos se benefician. Que las obras asistenciales no son suficientes. Que el seguimiento del Señor exige una revisión de su práctica social de conjunto, de sus estilos de vida, es decir una opción real por el pobre histórico de carne y hueso que puebla nuestro país y por sus exigencias colectivas.

Y sobre todo la Iglesia no sólo les habla. La Iglesia actúa y lo hace cada vez más precisamente como pueblo pobre, como comunidad creyente y solidaria. La Iglesia está colocando su hogar en el mundo del pobre, convocando a todos sin exclusión, pero desde allí. Por eso la Iglesia empieza a resultar extraña y molesta a la clase dominante. La experiencia la tienen laicos, sacerdotes y Obispos hace ya bastante tiempo en las diversas regiones de nuestro país y en toda América Latina... Sin este contexto el Comunicado de la CEAS y las tristes pero elocuentes reacciones que provocó en los diarios y en el Gobierno serían incomprendibles. Y no serían las comunidades cristianas populares, el pueblo pobre, quienes por el contrario entendieron mejor lo que pasaba y se solidarizaron más naturalmente con el pronunciamiento episcopal. Mirando hacia el futuro de nuestro país y del rol de la Iglesia en él estos son signos de esperanza.